

Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE del 3-6-98).

Segundo. Con independencia de que el imputado haga o no alegaciones y del contenido de las mismas, en su caso, el Órgano competente para resolver ha de examinar de oficio la correcta aplicación de las normas tanto sustantivas como procedimentales, conforme al principio constitucional de legalidad que debe regir el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración Pública.

Pues Bien, en el presente caso se ha incurrido en error en la notificación del acta de infracción al constatarse que entre el contenido de la misma y el texto publicado en el Boletín Oficial de Melilla (BOME) hay una falta de coincidencia parcial que afecta, en primer lugar, al Cuerpo de pertenencia del funcionario de la Inspección actuante (el acta la extiende un Inspector de Trabajo y Seguridad Social mientras que el encabezamiento del texto publicado en el BOME comienza diciendo «El Subinspector de Trabajo y Seguridad Social que suscribe ...»). En segundo lugar, dicha falta de coincidencia se aprecia también en relación a la cita de los preceptos legales que sirven de fundamento al acta practicada, por cuanto en el texto publicado en el BOME la cuantía de la sanción se propone de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, mientras que en el acta practicada la propuesta de sanción se hace de conformidad con el artículo 37 de la Ley 8/1988, de 7 de abril.

Estos errores en la notificación, no subsanados en la tramitación previa de la resolución, hacen que el acta carezca de los requisitos imprescindibles para alcanzar su fin, por lo que resulta obligado su anulación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre el procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.

Por todo lo expuesto, esta DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ACUERDA ANULAR EL ACTA DE INFRACCIÓN AO-64/99 PRACTICADA POR LA INSPECCIÓN PROVINCIAL

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA A LA EMPRESA «PYREDES.L.» DE DICHA CIUDAD.

Notifíquese esta resolución a la empresa interesada, advirtiéndole que contra la misma puede interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a partir de su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27-11-92), según la redacción dada a los mismos por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14-1-99).

Remítanse las oportunas copias a la Inspección Provincial de Trabajo de Melilla para constancia en el expediente, conocimiento del funcionario que lo haya promovido y notificación a la empresa interesada.

Madrid, 24 de mayo de 1.999. LA SUBDIRECTORA GENERAL. FDO. AVELINA LLORDEN MIÑAMBRES.

Para que surta los efectos de notificación, de conformidad con cuanto establece el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se expide el presente en Melilla a dieciocho de Junio de mil novecientos noventa y nueve.

LA JEFE SECCIÓN. Concepción Lascano Soroche.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO  
Y SEGURIDAD SOCIAL  
EDICTO  
CEDULA DE NOTIFICACIÓN

**1759.-** No habiéndosele podido notificar a la empresa RACHID MARZOK AMAR, D.N.I. 45.292.524, la Resolución dictada por El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, con fecha 01-06-99, en primera instancia, en expediente dimanante de Acta de Obstrucción, ref. AO-54/99, levantada a la empresa referida con fecha 12-02-99, por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Resolución en la que se hace constar:

VISTO el expediente sancionador incoado por acta de infracción n.º AO-54/99, extendida